

Santiago, trece de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos Rol N°35.692-2021 caratulados "Servicio de Evaluación Ambiental con Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera y sus afluentes" sobre reclamación judicial de acuerdo con el artículo 17 N°8 de la Ley 20.600, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental que acogió la reclamación, dejando sin efecto la Resolución Exenta N°33, de 23 de marzo de 2020, la Resolución Exenta N°20200310113, de 22 de mayo de 2020 y la Resolución Exenta N°77, de 7 de agosto de 2020, todas de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama.

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Segundo: Que, se alega como causal de nulidad formal la infracción al artículo 26 de la Ley N°20.600, inciso 4°, que establece la obligación de que la sentencia sea pronunciada conforme a las reglas de la sana crítica.

Afirma que la valoración que hace el juez no puede ser libre, debiendo regirse por criterios racionales y



que el fallo que impugna infringe las normas sobre apreciación de la prueba.

Explica que se vulnera la regla de los conocimientos científicamente afianzados al omitir los antecedentes técnicos presentados en el Proceso de Evaluación que permiten constatar que no existe susceptibilidad de afectación directa respecto de la Comunidad, realizando una valoración errada del Informe Antropológico y demás antecedentes que dan cuenta de que, precisamente, no existe tal susceptibilidad.

Tampoco explica el fallo la manera en que llega a concluir que resulta necesaria la realización de un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en especial cuando el Informe Antropológico, realizado con la participación del Presidente y otros integrantes de la Comunidad en reunión de 19 de julio de 2018, levanta antecedentes que llevan al primer ICSARA e ICSARA Complementario, cuyas dudas son abordadas en la Adenda y Adenda Complementaria, en las que además se incorporaron las observaciones realizadas por la CONADI, institución que posteriormente manifestara su conformidad con el Proyecto, indicando que no se generarán los impactos del artículo 11 de la Ley N°19.300 sobre la Comunidad.

Asimismo, el tribunal afirma que no se habrían considerado los aspectos relevados por la Comunidad en la reunión de 19 de julio de 2018, pese a que prácticamente



toda la Adenda Complementaria discurre sobre las materias planteadas por los reclamantes.

Estima también vulnerado el principio de la Razón Suficiente al indicar la sentencia que la afectación se daría por el tránsito constante y permanente de 24 vehículos diarios por caminos utilizados por los reclamantes para actividades de trashumancia, sin que los límites de velocidad establecidos resulten suficientes, pero sin analizar cómo se produciría la afectación a la conexión y sentimientos de arraigo con el territorio de la Comunidad, omitiendo analizar la significancia de las medidas del proyecto y toda la prueba presentada en el juicio.

Denuncia, asimismo, que la sentencia realiza una valoración parcial de los elementos de prueba, al omitir que: i) el camino que atraviesa los territorios de la comunidad, y que se utilizará en conjunto con la Comunidad, se construyó con ocasión de labores de prospección minera realizadas en la zona de Caspiche, donde existe un gran número de huellas y plataformas, por lo que no es primera vez que se realizarán estos trabajos en dicho lugar; ii) las actividades de trashumancia se realizan en distintos territorios de la Comunidad, los que son de uso esporádico, demostrado con el actual abandono de los campamentos; iii) en el Informe Antropológico no se identificaron rutas de trashumancia



en la zona donde se localizan las plataformas de prospección, y aunque identifica nuevas rutas, no se desvirtúa su uso ocasional y el estado de abandono de los campamentos; iv) los caminos y huellas que se utilizarán para el Proyecto ya existen y fueron contruidos precisamente para el desarrollo de actividades de exploración minera; v) el Proyecto no afectará zonas de pastoreo porque estas se ubican en el fondo de quebradas, que son consideradas zonas de exclusión ambiental y vi) a partir del Informe Antropológico se concluye que la infraestructura de alojamiento para el desarrollo de actividades de trashumancia es cada vez menos utilizada pues las familias iniciaron el uso de vehículos motorizados para ir a ver el ganado por el día.

Tampoco habría afectación por emisiones de ruido pues en ninguno de los lugares utilizados para pernoctar o establecerse en las actividades de trashumancia se supera la norma de referencia utilizada para determinar los niveles de inmisión por fuentes móviles.

Agrega que no se generarían emisiones de polvo por el tránsito vehicular producto del uso de supresor y la ejecución de medidas de humectación, que no se generará un deterioro en el camino y que, de ser necesarias reparaciones, se llevarán a cabo por el titular del Proyecto, con acuerdo previo de la Comunidad, olvidando además el tribunal que entre las partes se suscribió un



contrato de servidumbre que autorizó al titular del Proyecto al uso del camino de propiedad de la Comunidad.

Finalmente se vulneraría, en el fallo cuya revisión solicita, el Principio de Identidad desde que trata como situación base o permanente el tránsito de 24 vehículos diarios, lo que es ocasional y, en el peor escenario, se daría a lo más durante 8 meses del año.

Tercero: Que, como puede advertirse de lo indicado en el razonamiento precedente, más que denunciar una infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26 inciso cuarto de la Ley N°20.600, el recurrente cuestiona las conclusiones a que arriba el Tribunal Ambiental.

En efecto, cuando se sostiene que el fallo omite antecedentes técnicos en realidad se pretende que tales antecedentes debieran dar lugar a una inferencia distinta de aquella contenida en la sentencia que se recurre. Lo mismo sucede cuando se denuncia una aparente valoración parcial de los medios de prueba.

De manera que es manifiesto que los fundamentos de la causal invocada no configuran la misma sino que, más bien, dan cuenta de la disconformidad de la parte demandante con el razonamiento que lleva a los jueces de la instancia a concluir que entre el proyecto "Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche" y la



Comunidad Indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación que requiere la realización de un procedimiento de consulta indígena, afectación que también requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, como concluye tal tribunal.

Que, por lo demás y como ha señalado de manera reiterada esta Corte, la valoración de la prueba rendida es de resorte exclusivo del juez de la instancia e improcedente como argumento para una causal de casación en la forma como la que se invocó.

Cuarto: Que, teniendo en consideración lo antes razonado, la casación formal no puede prosperar, puesto que los antecedentes en que se sustenta el vicio denunciado no constituyen la causal impetrada, de manera que se declarará su inadmisibilidad.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que, en un primer capítulo de nulidad sustancial se denuncia la infracción al artículo 53 de la Ley N°19.880 y al artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 por interpretación errónea de su contenido, estimando que procedía la acción recursiva judicial contenida en esta última norma.

Afirma que resulta justificada la posibilidad de impugnar el acto invalidatorio, mas no el que deniega dicha solicitud, toda vez que se trata de una facultad que



la Administración puede ejercer cuando advierte un vicio de legalidad en un acto propio.

Sostiene que resulta evidente que, cuando el artículo 17 N°8 otorga competencia al tribunal ambiental para "Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental" contempla una excepción a la regla general, al establecer la posibilidad de impugnar un acto que deniega la Solicitud de Invalidación por lo que debe aplicarse de manera restrictiva, y, por ende, una correcta interpretación de dicha norma implica sostener que esta posibilidad de impugnar el acto que rechaza la Solicitud de Invalidación dice relación con una invalidación distinta a la invalidación-facultad antes referida y se trataría de un arbitrio especial de impugnación del acto negativo.

Entiende que tal interpretación realiza esta Corte cuando señala que debe distinguirse entre invalidación propia (invalidación-facultad) e impropia (invalidación-recurso).

Agrega que en el caso concreto la reclamante solicitó la invalidación propiamente tal, es decir, la invalidación general del artículo 53 de la Ley N°19.800, por lo que no se encontraría legitimada para recurrir ante los tribunales ambientales cuando se ha rechazado su solicitud



de invalidación, pues sólo existe legitimación activa para recurrir contra un acto invalidatorio.

Pero, aún de estimarse que se solicitó la invalidación impropia, debió declararse inadmisibile porque se interpuso luego de transcurridos más de cuatro meses desde la publicación de la RCA N°009/20119 en la plataforma del e-SEIA.

Estima que incurre la sentencia en una errónea interpretación del artículo 53 de la Ley N°19.880 y el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, a partir de una equivocada interpretación del sentido y alcance que le da a la primera disposición la Comisión Atacama y a una omisión en la aplicación de la segunda, interpretación que incluso se contradice con lo señalado por el mismo Tribunal en sentencias anteriores. Ello porque concluye erróneamente que lo resuelto por la Comisión Atacama, en cuanto al sentido y alcance del artículo 53 de la Ley N°19.880 sería contradictorio con lo señalado por el Director Ejecutivo sobre la procedencia de la acción de reclamación judicial del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, lo que atentaría contra la doctrina de los actos propios. Sin embargo, estima que no existe tal contradicción porque la Comisión Atacama indica que la invalidación interpuesta en los términos del artículo 53 de la Ley N°19.880 lo fue de manera correcta, dentro del plazo de dos años, pero ello no habilita para recurrir en



los términos del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600. Y el Director Ejecutivo señala en su informe que no procede el recurso de reclamación judicial del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 porque la solicitud de invalidación debió presentarse dentro del plazo de 30 días desde la publicación del acto y en el presente caso ello ocurrió casi cuatro meses después, resultando extemporánea.

Sexto: Que, en un segundo capítulo, estima que se infringen los artículos 13 de la Ley N°19.300 y 19 del Código Civil en relación a: i) los artículos 27 y 85 del RSEIA; ii) artículo 11 letra d) de la Ley N°19.300 respecto del artículo 8° del RSEIA; y, iii) artículo 11 letra c) de la Ley N°19.300 en relación al artículo 7° del RSEIA.

Ello por cuanto se contraviene el artículo 13 de la Ley N°19.300 toda vez que se omite lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para efectos de determinar la procedencia del Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas e interpreta erróneamente el artículo 27 de dicho Reglamento para efectos de señalar que ésta sí procedía.

Explica que el artículo 13 de la Ley N°19.300 hace un reenvío al Reglamento para los efectos de establecer el procedimiento de evaluación ambiental y, de acuerdo con su artículo 85, se debe realizar un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas en el caso que el proyecto o actividad



genere los impactos indicados en los artículos 7, 8° y 10 de ese mismo cuerpo reglamentario, que, a su vez, corresponden a los del artículo 11 letras c), d) y f) de la Ley N°19.300, y que dichos impactos afecten a Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas, siendo dicha circunstancia un requisito necesario para la exigibilidad de la referida consulta. A su turno, el artículo 27 del señalado Reglamento trata sobre el análisis de susceptibilidad de afectación directa de tales Grupos.

De manera que, para la procedencia del Estudio de Impacto Ambiental y del Proceso de Consulta, se requiere que el Proyecto genere impactos significativos, que éstos sean aquellos descritos en el artículo 11 letras c), d) y f) de la Ley N°19.300 y afecten a un Grupo Humano Perteneciente a Pueblos Indígenas. Según lo dispuesto en estas últimas normas, no cualquier alteración que pueda generar un proyecto sobre una Comunidad es considerada como impacto que amerite ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental, sino sólo aquellas que sean significativas, debiendo atenderse para ello a la duración o magnitud de las circunstancias descritas en el artículo 7° del Reglamento.

Señala que, de acuerdo con el artículo 11 letra d) de la Ley N°19.300 y artículo 8 del Reglamento, un proyecto genera efectos adversos significativos si se localiza en o próximo a poblaciones protegidas que sean susceptibles de



ser afectadas por el mismo, considerándose que se encuentra próximo a ellas si éstas se localizan dentro de su área de influencia y que es susceptible de afectarlas según la extensión, magnitud y duración de la intervención del área en donde ellas habitan. Para ello debe considerarse, además, que el Convenio 169 establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Y se entiende la afectación directa como la generación, por parte del proyecto o actividad, de alguno de los impactos ambientales significativos dispuestos en los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento. De manera que sólo reuniéndose copulativamente estos requisitos es procedente el Proceso de Consulta en forma incidental al proceso de Evaluación.

Por lo que el Tribunal infringe las normas ya citadas pues no observa los requisitos del artículo 85 del Reglamento para determinar la concurrencia de susceptibilidad de afectación directa a Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas al estimar que el mismo se produce por el sólo tránsito de vehículos, sin tener en cuenta la magnitud y duración de ello. Asimismo, omite la exigencia de que se generen los impactos de los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento, estimando que la susceptibilidad de afectación directa se da por la evidente interacción y por las actividades que va a desarrollar el Titular,



contraviniendo a su vez lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley N°19.300.

Estima que el fallo vulnera el artículo 13 en relación con el artículo 11 letras c) y d), todos de la Ley N°19.300 y artículos 7 y 8 del Reglamento al señalar que la significancia derivada de la duración o magnitud de los impactos no puede ser el único criterio que guíe la protección de poblaciones o pueblos indígenas y con ellos interpretar erróneamente tales normas, atribuyéndoles una descripción de concurrencia de susceptibilidad indeterminado que no contempla, desatendiendo su tenor literal.

Finalmente, en este capítulo, se vulneraría el artículo 13 de la Ley N°19.300 en relación con el artículo 27 del Reglamento al sostener el fallo que esta última norma establecería la necesidad de evaluar en una etapa temprana la eventual afectación del proyecto a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, alejándose del tenor literal de la norma, creando prácticamente un trámite previo de análisis de procedencia del Proceso de Consulta no contemplado en el Reglamento.

Séptimo: Que, en un tercer capítulo de nulidad, la sentencia vulneraría el artículo 25 de la Ley N°20.600 pues no enuncia los fundamentos técnicos ambientales sobre los cuales se sustenta para resolver que sí se generan los impactos del artículo 11 letra d) de la Ley N°19.300,



reproduciendo las alegaciones del reclamante y del Servicio, para luego remitirse a sus propios considerando anteriores que nada señalan acerca de los impactos del citado artículo 11 letra d).

Octavo: Que, en un último acápite, sostiene se vulnera el artículo 30 de la Ley N°20.600 pues el tribunal no sólo ordena dejar sin efecto la Resolución impugnada y la Resolución de Calificación Ambiental, sino que establece cuál debe ser el contenido de esta última, lo que no está permitido por el ordenamiento jurídico toda vez que el único acto que puede ser recurrido mediante la acción del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 es aquel dictado por la Comisión que se pronuncia sobre la solicitud de invalidación, esto es, la Resolución Exenta N°33/2020, pero en ningún caso indicar cómo ingresará el Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Noveno: Que, para un mejor entendimiento del proceso, resulta útil consignar los siguientes antecedentes del mismo:

1. Que el proyecto "Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche" de la Compañía Minera Casale SpA ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental mediante Declaración de Impacto Ambiental y calificado ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta N°9 de 6 de febrero de 2019, RCA N°009/2019, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, cuyo objetivo es la realización de campañas de



prospección minera en el sector de Caspiche mediante sondeos de tipo aire reverso y/o diamantina, con 332 plataformas y un Campamento para 200 personas.

2. El 18 de julio de 2019 don Roberto Salinas Cortez, en su calidad de Presidente y representante legal de la Comunidad Indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, dedujo una solicitud de invalidación administrativa en contra de la RCA N°009/2019.

3. Por Resolución Exenta N°33 de 30 de marzo de 2020 la Comisión Atacama rechazó la solicitud de invalidación.

4. El 7 de abril de 2020 la Comunidad interpuso un recurso de reposición y jerárquico, en subsidio, en contra de la Resolución Exenta N°33/2020.

5. El 22 de mayo de 2020 se dicta la Resolución Exenta N°20200310113/2020 por el Servicio de Evaluación Ambiental Atacama que rechaza el recurso de reposición, la cual es ratificada por la Resolución Exenta N°77 de 07 de agosto de 2020 de la Comisión Atacama.

6. El 19 de agosto de 2020, mediante Resolución Exenta N°202099101529 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental no se admite a trámite el recurso jerárquico.

7. Con fecha 23 de septiembre de 2020 la Comunidad interpone un recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N°77/2020 de acuerdo con el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600.



Décimo: Que, por sentencia de 21 de abril de 2021 el Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación deducida por la Comunidad, en los términos indicados en el considerando primero precedente.

Para fundar tales decisiones, estimó, en cuanto a la extemporaneidad de la reclamación, que dado que la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama conoció y resolvió esta alegación rechazando los argumentos del Titular del Proyecto, no es procedente que el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental sostenga una interpretación contraria a lo resuelto por la Comisión, fundado en los mismos elementos de hecho y de derecho que llevaron a su desestimación, lo que pugna con el principio "venire contra factum proprium non valet" o doctrina de los actos propios, además de resultar improcedente la alegación de que la Comunidad tendría la calidad de tercero relativo.

Undécimo: Que, sobre la procedencia de la Consulta Indígena, la sentencia impugnada concluye, a partir de las normas contenidas en el Convenio 169 OIT, los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena, artículo 85 en relación con los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y artículo 11 de la Ley N°19.300, que en un proceso de evaluación ambiental la consulta indígena constituye una obligación para la



autoridad evaluadora cuando, producto de dicha revisión, se deba decretar alguna medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas. Agrega que, de acuerdo con el estudio antropológico acompañado por el Titular del Proyecto, se ha verificado que dentro de su área de influencia habita la Comunidad Indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes y que se produce una interacción entre distintas obras y actividades de la Comunidad, como por ejemplo, el uso de caminos de trashumancia y sitios de significancia cultural, además del emplazamiento del campamento en tierras de la Comunidad, lo que configura una interacción entre esta última y el Proyecto, concluyendo que se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación, lo cual no es clarificado adecuadamente a través de las acciones o medidas que el Servicio argumenta para descartar aquello.

Agrega el fallo que, a la luz del artículo 27 del Reglamento resulta necesaria una evaluación en una etapa temprana de la eventual afectación del Proyecto a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, considerando sus mecanismos propios de toma de decisiones así como sus costumbres y estructuras organizativas y, en el presente caso, la autoridad dispuso de la información necesaria para haber advertido la necesidad de la Consulta, habida consideración, además, a la buena fe que guió la participación de la Comunidad con la Titular del



Proyecto, para la cual la Consulta Indígena siempre fue un aspecto fundamental para construir los acuerdos y convenios que viabilizaban la ejecución del Proyecto.

Asimismo, estima indudable que la susceptibilidad o probabilidad de afectación de la Comunidad es alta toda vez que el Proyecto se emplaza en sectores o territorios indígenas que prestan a sus comuneros servicios ecosistémicos ancestrales y que, por lo demás, son vitales para la subsistencia de dicha Comunidad, preocupación que fue oportunamente manifestada por aquella.

De esta forma, el Servicio debió haber profundizado el alcance de su análisis a objeto que se evaluara el proyecto conforme al mérito de la totalidad de los antecedentes que se acompañaron al proceso, tanto de aquellos emanados de la titular como de aquellos acompañados por la Comunidad, debiendo considerar además que el Proyecto supone, durante un período de cuatro años, la ocupación y uso de un campamento minero, un área de sondeos y sus huellas de acceso, así como el uso permanente y continuado por parte del titular del proyecto de los caminos que forman parte del trazado de rutas ancestrales de trashumancia, espacios de uso comunitario por donde se pretende el tránsito diario de un total de 24 vehículos pertenecientes al Proyecto.

Duodécimo: Que, seguidamente la sentencia razona acerca de la justificación de la existencia de los



efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, lo que determina la realización de un Estudio de Impacto Ambiental o, en su caso, una Declaración de Impacto Ambiental.

De esta forma concluye que no se configura la situación prevista en el literal b) del artículo 11, desde que no se producen efectos adversos de significancia sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables existentes en el área del proyecto, incluidos el suelo, agua y aire.

Sobre el literal c) de la misma disposición, referido a que la Comunidad alega la afectación de 1,6 hectáreas de tierras de propiedad indígenas inscritas en su favor, el tribunal da por establecido que las tierras y territorio indígena utilizado ancestralmente para el ejercicio de las actividades de pastoreo y recolección de hierbas y varillas, será intervenido durante un período de cuatro años con la ocupación y uso de un campamento minero, un área de sondajes y sus huellas de acceso, y con el uso permanente y continuado por parte del titular del proyecto de los caminos que forman parte del trazado de rutas ancestrales de trashumancia, espacios de uso comunitario por donde ahora transitará diariamente, y de manera adicional al flujo vial existente, un total de 24 vehículos motorizados pertenecientes al proyecto.



Por lo que dada la importancia de la trashumancia en la cultura Colla, concluye el tribunal que la alteración del estilo de vida trashumante inherente a la cultura de la Comunidad, no ha sido correctamente evaluado por el Servicio, en la medida que el tráfico permanente de vehículos por 4 años en dicho territorio configura una alteración de carácter significativo a su sistema de vida y costumbres, correspondiendo que el proyecto se evalúe mediante un Estudio de Impacto Ambiental, configurándose la causal en análisis.

En cuanto al literal d) del artículo 11 de la Ley 19.300, que dispone como elemento para determinar la procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental, la "Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación (...), susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar", el fallo se remite a lo razonado acerca de la necesidad de llevar a cabo un proceso de Consulta Indígena con ocasión de la susceptibilidad de afectación directa del proyecto a poblaciones indígenas protegidas, es decir, a lo razonado a propósito del literal c) recién referido, acogiendo, en consecuencia también este alegato de la reclamante.

Luego, analiza la procedencia de la circunstancia prevista en el literal f) del ya mencionado artículo 11, para concluir que no hay evidencia en el procedimiento de



evaluación de que se configure una "Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural" como dispone tal norma.

Décimo tercero: Que, finalmente, desecha la sentencia en revisión que el Proyecto incumpla la normativa sobre gestión de residuos peligrosos, estimando suficientes las medidas adoptadas por el Titular del Proyecto.

Décimo cuarto: Que resulta pertinente recordar que, según lo dispone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación en el fondo procede en contra de sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley y siempre que dicha infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo. Por su parte, para que un error de derecho pueda influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo, como lo exige la ley, aquél debe consistir en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida.

Décimo quinto: Que, sobre el primer capítulo de nulidad referido a la procedencia y, en subsidio, extemporaneidad de la reclamación respecto de la Resolución que denegó la solicitud de invalidación de la RCA N°009/2019, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, estos sentenciadores han señalado



reiteradamente que existen dos tipos de invalidación: la general de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, excluida para el responsable del proyecto y los terceros intervinientes en el procedimiento, con reclamo ante el Tribunal Ambiental cuando la Administración invalida; y la "invalidación impropia" o invalidación recurso, para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, para reclamar ante el Tribunal Ambiental, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación, difiriendo el plazo para su interposición según la calidad de quien recurre, como se indicará más adelante.

Y de los antecedentes previamente revisados aparece que, al contrario de lo que indica el recurrente, claramente la invalidación solicitada por la Comunidad es aquella prevista en el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 y, en caso alguno, la del artículo 53 de la Ley 19.880, como sostiene. Por lo que, tratándose de una invalidación impropia es perfectamente procedente la reclamación ante el tribunal ambiental, aún para el caso de que ella sea rechazada, como se ha resuelto.

En cuanto a la supuesta extemporaneidad alegada, estos sentenciadores también han señalado de manera consistente que una interpretación armónica de las



instituciones comprendidas en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 y 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, siempre orientada por el principio pro actione que impregna a ambos estatutos normativos, debe llevar a concluir que no es exigible al tercero absoluto el plazo de 30 días contenido en la ley que creó los Tribunales Ambientales, puesto que el ser ajeno al procedimiento administrativo donde se originó el acto que se pretende invalidar y, por consiguiente, la inexistencia de la obligación de practicar notificación alguna a su respecto, torna en ilusorio el ejercicio oportuno de la instancia de revisión, tanto administrativa como jurisdiccional.

Por lo que el fallo cuya nulidad se solicita no ha incurrido en los yerros denunciados en esta primera parte.

Décimo sexto: Que, en relación con la supuesta infracción de los artículos 13 de la Ley N°19.300 y 19 del Código Civil en relación con los artículos 27 y 85 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como de los artículos 11 letra d) de la Ley N°19.300 respecto del artículo 8° del mismo Reglamento y artículo 11 letra c) de la Ley N°19.300 en relación al artículo 7° del citado Reglamento, como pueda advertirse, lo que el recurrente cuestiona son las conclusiones a que arriba el Tribunal Ambiental a partir de los antecedentes de lo actuado tanto en el proceso de Declaración de Impacto Ambiental como en el de invalidación de la Resolución de



calificación dictada en el mismo, nada de lo cual configura realmente una infracción a las normas que han de servir para resolver la invalidación que se ha solicitado.

En efecto, cuestiona el recurrente que el Tribunal concluyera que se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación de la Comunidad Indígena Colla y Río Jorquera y sus Afluentes, inferencia que los sentenciadores logran luego de analizar las particularidades de la Comunidad y la circunstancia de que entre ella y diversas obras del Proyecto se produce una interacción que no es clarificada adecuadamente en el Proyecto.

Finalmente, lo que el Servicio no comparte es la apreciación del Tribunal de que el uso en el Proyecto de los caminos de trashumancia, de los sitios de significación cultural y el emplazamiento del campamento en tierras de la Comunidad configuren tal "impacto significativo" sobre la base de su duración o magnitud. En este punto resulta relevante señalar que el fallo cuestionado no se limita a configurar tal impacto con el único antecedente del tránsito de vehículos en la zona, sino que analiza las particularidades de la Comunidad y el conjunto de actividades que contempla el Proyecto, como ya se expuso.

Décimo séptimo: Que, resulta asimismo relevante señalar que no se produce la vulneración del artículo 13



de la Ley N°19.300 en relación con el artículo 27 del Reglamento pues la alusión que realiza el Tribunal a la necesidad de una "evaluación temprana" de una eventual afectación a pueblos indígenas no pretende incorporar un trámite previo no previsto por el legislador de Consulta Indígena pues se desarrolla tal idea en el marco de la reflexión acerca del rol determinante que le corresponde al Servicio al momento de establecer el mecanismo a utilizar en el proceso de evaluación ambiental de un proyecto ante la presencia de una Comunidad Indígena, como en el presente caso.

Décimo octavo: Que, en relación con el tercer fundamento de casación de fondo que se ha invocado, sólo resta indicar que resulta palmario que tanto la necesidad de realizar una Consulta Indígena como la de una Evaluación de Impacto Ambiental, y no de sólo un proceso de Declaración, discurren sobre la afectación del Proyecto significa a la subsistencia de la Comunidad, por lo que resultaba innecesario que el tribunal reiterara los mismos fundamentos previamente expuestos en su fallo.

Décimo noveno: Que, finalmente, tampoco aparece la pretendida vulneración del artículo 30 de la Ley N°20.600 pues la consecuencia natural de las invalidaciones solicitadas no puede sino ser la orden de que se proceda a una nueva evaluación ambiental que, sobre la base de lo alegado por el solicitante de invalidación y lo razonado



por el Tribunal Ambiental, en caso alguno puede significar un nuevo procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, sino, por conclusión lógica, uno de Evaluación.

Vigésimo: Que, en consecuencia, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar por incurrir en manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se declara inadmisibile** el recurso de casación en la forma y **se rechaza** el de fondo, ambos deducidos por el demandante en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Silva Cancino

Rol N° 35.692-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Mario Carroza E., Sr. Mauricio Silva C., y por los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sra. María Angélica Benavides C. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Abogada Integrante Sra. Benavides por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Mauricio Alonso Silva C., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, trece de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

